

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D. C., 19 de febrero de 2021

**MEDIDA CAUTELAR - ACCIÓN DE LESIVIDAD
EXPEDIENTE: 2019 00459**

COLPENSIONES VS MARY AIDÉE ÁVILA CIFUENTES

Ingresa al Despacho la demanda interpuesta por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** en contra de la señora **MARY AIDÉE ÁVILA CIFUENTES**, para resolver sobre la **MEDIDA CAUTELAR** presentada por el apoderado de la parte actora.

I. ANTECEDENTES:

Medida Cautelar Solicitada: El apoderado de la parte actora sustentó la medida cautelar de carácter suspensivo contra los actos acusados en los siguientes términos:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, solicito a su Despacho el decreto de la medida cautelar consistente en la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de la Resolución No. SUB 122224 del 17 de mayo de 2019, proferida por la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, por la cual se Reconoce una pensión de vejez.

Lo anterior, atendiendo a que se cumplen la totalidad de requisitos para su decreto de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011:

I. La demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho, toda vez que la Resolución Nro. SUB 122224 del 17 de mayo de 2019, proferida por la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, por la cual se reconoció y ordena el pago de una pensión de vejez, respecto de la cual se solicita la nulidad, fue expedida en contravía de lo ordenado en el Decreto 813 de 1994 y decreto 2527 de 2000, porque una vez efectuado el estudio pensional que en derecho corresponde, se evidencio que el asegurado no cumple con el requisito mínimo de semanas, esto es, 1.300, conforme Ley 797 de 2003, ya que solo tiene 1.285 semanas.

II. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, como administradora del régimen de Prima Media de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, es la encargada del reconocimiento de las prestaciones a que tengan derecho sus afiliados.

Así mismo se debe señalar que el pago de una prestación generada sin el cumplimiento de los requisitos legales, atenta igualmente contra el principio de Estabilidad Financiera del Sistema General e Pensiones, establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005 como una obligación del Estado, entendiendo como el manejo eficiente de los recursos asignados a dicho sistema con el objetivo de garantizar a todos los habitantes el

derecho irrenunciable a la seguridad social, procurando que las decisiones que afecten dicho sistema como el reconocimiento de prestaciones, se adopten teniendo en cuenta que está conformado por recursos limitados, que se distribuyen de acuerdo con las necesidades de la población, con el objetivo de que los derechos adquiridos se hagan efectivos.

Es así como este perjuicio inminente en contra de la estabilidad financiera del sistema general de pensiones se configura en la medida en que dicho sistema debe de disponer de un flujo permanente de recursos que permita su mantenimiento y adecuado funcionamiento, y el continuar con el pago de una prestación a favor de una persona que no acredita todos los requisitos para su reconocimiento afecta gravemente su capacidad de otorgar y pagar las prestaciones de los afiliados que si tienen derecho a su reconocimiento, vulnerando como consecuencia el principio de progresividad, y el acceso a la pensión de todos los colombianos.”

Trámite de la Medida Cautelar: De la Medida cautelar se corrió traslado a la señora Mary Aydee Ávila Cifuentes mediante auto del 20 de enero de 2020 por el término de cinco (5) días hábiles en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., y ss. para lo cual se le realizó la notificación personal en su correo electrónico el día 1 de diciembre del año 2020. Culminado el término del traslado de la medida cautelar la accionada guardó silencio.

Para resolver se **CONSIDERA:**

De conformidad con el artículo 230 del C.P.A.C.A., las medidas cautelares dentro del proceso contencioso administrativo pueden ser de carácter; preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A, la cual se refieren a la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados y el respectivo restablecimiento del derecho. Sin embargo, para la adopción de dichas medidas se requiere del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma ibídem, la cual establece:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por **violación de las disposiciones invocadas** en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del **análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (...)”

Planteado lo anterior, se tiene que el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, condicionada a que el acto acusado contrarie de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el

simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, puesto que de requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte la sentencia.¹

Así, uno de los requisitos exigidos en la norma aludida, es la sustentación expresa de la petición, aspecto que fue ratificado por el Consejo de Estado inclusive desde antes de la expedición de la nueva codificación contenciosa administrativa, como se observa en providencia de enero 23 de 2003, Consejero Ponente Doctor Mario Alario Méndez, Referencia: expediente 3069, donde se especifica:

“(...)Entonces, para sustentar la solicitud de suspensión provisional, han de indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación, de modo expreso, como es la exigencia legal. Ello significa que para el efecto no es bastante la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación que se haga en la demanda como fundamento de sus pretensiones. No. La sustentación de la solicitud de suspensión provisional se repite, ha de hacerse de modo expreso, porque es exigencia legal.

Cabe señalar, sin embargo, como se ha explicado muchas veces, que el requisito de sustentar de modo expreso la solicitud de suspensión provisional se satisface con la remisión que se haga en la solicitud al capítulo de la demanda concerniente a las normas violadas y al concepto de la violación, criterio que en esta ocasión se reitera. Siendo, pues, que el demandante para el efecto se remitió a las normas legales citadas y al concepto de violación explicado en la demanda, debe entenderse cumplido el requisito legal(...)”²

Bajo los presupuestos enunciados, se resolverá la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo de reconocimiento pensional de la accionante. En primer lugar, el apoderado de la parte actora señala que debe declararse la suspensión provisional de la Resolución No. SUB 122224 del 17 de mayo de 2019, al haberse expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse y con falsa motivación, sostiene que en el acto acusado se reconoció una pensión de vejez sin acreditar el lleno de los requisitos legales. Particularmente en lo que respecta al monto mínimo de semanas cotizadas con fundamento en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.

Sin embargo, en el presente caso el análisis de los actos administrativos demandados no desprende a simple vista y de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta una violación a normas superiores que ameriten el decreto de una medida previa; en efecto, al realizar el cotejo de las normas que se confrontan, regímenes de la Ley 33 de 1983, Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003., las pruebas aportadas y la sustentación de la medida cautelar no se puede extraer bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad que deba decretarse la medida cautelar solicitada.

¹ Consejo de Estado, Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alirio Eduardo Hernández Enríquez

² Consejo de Estado, sentencia del veintitrés (23) de enero de dos mil tres (2003), exp: 3069. M.P.: Mario Alario Méndez.

Lo anterior, es indicativo de que esta decisión requiere de un análisis probatorio de fondo, en el cual el Juez agote el procedimiento y realice el respectivo juicio de ponderación en aras de establecer la validez de los actos acusados al momento en que se dicte sentencia. Especialmente a lo que respecta a la contabilización de semanas cotizadas reflejadas en la historia laboral de la accionante y la posibilidad de que aparezcan, semanas laboradas no cotizadas y pueda encuadrarse en algún régimen de transición.

Se debe agregar, que en el presente caso existió una decisión judicial durante el trámite de una acción constitucional por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “f” expediente No. 110013331701200900169001, para un reintegro y pago de aportes pensionales de la accionante en contra de la Comisión Nacional de Televisión, por lo que es necesario el estudio a fondo de esta decisión judicial y sus implicaciones en la Historia Laboral de la accionada para la determinación de los cumplimiento de sus requisitos pensionales.


En este sentido y siendo que la medida cautelar solicitada no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 230 y 231 del C.P.A.C.A. EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

II. RESUELVE:

PRIMERO: SE NIEGA la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes de conformidad con lo establecido en el Artículo 205 del C.P.A.C.A en concordancia con lo establecido en los artículo 8 y 9 del Decreto Legislativo 806 del 2020, a los correos, maac1@hotmail.com y paniguacohenabogados@gmail.com mrojas@estudiolegal.com, paniguabogota4@gmail.com y en los correos oficiales de la entidad accionante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ